

Haití

El marasmo político

Robert Maguire

Después de las elecciones de mayo de 2000, Haití se hundió en un clima de agitación política provocado por la manipulación en el escrutinio para escaños parlamentarios clave, favorable al partido oficial, del presidente Aristide. Mientras la OEA y la Caricom hacían esfuerzos para solucionar el problema, la oposición haitiana endurecía su postura. Posteriormente, en elecciones celebradas en noviembre de 2000 bajo el boicot de la oposición, Aristide obtuvo fácilmente su segundo periodo presidencial. Para mediados de julio de 2001, esfuerzos internacionales lograron el inicio de unas negociaciones que prometían solucionar la parálisis política.

Pocas nubes, si es que alguna, tapaban el cálido sol sobre los ciudadanos de Haití en la mañana del 7 de febrero de 2001, mientras esperaban la ceremonia de investidura de Jean-Bertrand Aristide como presidente de la República en su segundo mandato de cinco años. Para un observador fortuito, el perfecto cielo de aquel día coincidía con una transición por completo armoniosa de un presidente electo a su sucesor, conforme el mandatario saliente, René Preval, y Aristide pasaban la jornada asistiendo con fluidez a una serie de actos inaugurales bien pautados. Desde tempranas horas de la mañana, cuando ambos visitaron el Palacio Legislativo para la jura del cargo y la entrega de la banda presidencial ante los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, hasta fines de la tarde, cuando un raudal de globos azules y rojos se elevó desde los jardines del palacio después del discurso inaugural de Aristide, el día parecía sacado de un cuento de hadas por lo perfecto.

Tras la fachada

Sin embargo, bajo esa fachada armoniosa no todo estaba bien para el país, o para el presidente Aristide y su partido de gobierno, Familia Lavalas (FL).

ROBERT MAGUIRE: coordinador del Programa Haití de la Universidad George Washington; director de Programas de Asuntos Internacionales en el Trinity College, Washington, D.C. Desde mediados de los años 70 su trabajo se concentra en Haití.

Palabras clave: elecciones, democracia, crisis política, sistema político, Haití.

Comparada con la que asistió a su primera toma de posesión en 1991, esta vez la muchedumbre era mucho menor y más comedida. Había menos dignatarios internacionales y en su mayoría eran claramente de menor rango. Durante su discurso, Aristide mencionó ufano la presencia de su amigo y aliado, el ex-presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, aparte de cuya figura tuvo muy pocos visitantes o funcionarios de alta jerarquía a quienes saludar en las ceremonias. La mayoría de los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos, enviaron a sus embajadores residentes. Hipólito Mejía, presidente de la vecina República Dominicana, recién investido en su propio cargo, a último momento optó por no asistir.

También se notaba la ausencia de políticos haitianos notables que en uno u otro momento habían sido muy cercanos aliados del nuevo presidente. Entre ellos el activista Gérard Pierre-Charles, secretario general de un prominente partido y en otros tiempos uno de los más fieles seguidores de Aristide. Pierre-Charles no solo no asistió a las ceremonias en honor de un hombre al que ahora denunciaba acerbamente, sino que además se negó a reconocerlo como presidente. De hecho, él y sus socios políticos también se negaron a reconocer la legitimidad del Parlamento que presenció la juramentación de Aristide, la mayoría de cuyos miembros había obtenido el cargo como consecuencia de las elecciones nacionales celebradas en mayo de 2000. El antiguo aliado de Aristide estaba en ese momento en otra parte de la ciudad, conferenciando con sus socios políticos y con Gérard Gourgue, el hombre al que ellos acababan de nombrar «presidente provisional» de Haití. Significativamente, la OEA envió un funcionario de alto rango a presenciar los actos de toma de posesión en Puerto Príncipe, el secretario general adjunto Luigi Einaudi. Sin embargo, la visita de Einaudi no era simplemente protocolar. En las jornadas previas al 7 de febrero se reunió con varios embajadores y con personalidades de la sociedad civil tratando febrilmente (y por último sin éxito) de negociar una tregua política entre Aristide y sus adversarios. Así el día de la investidura, mientras el nuevo presidente proclamaba su intención de gobernar a todos los haitianos, en las colinas que se elevan sobre el palacio un grupo pequeño pero influyente de activistas políticos tenía otros propósitos, que giraban en torno de una idea central: sacar a Aristide y su maquinaria arrolladora, Lavalas, del poder político.

Crisis electoral

Desde la elección de Aristide como presidente en 1990, Lavalas (la marea purificadora) es la fuerza dominante en la política y la sociedad haitianas. En 1997 Aristide reconvirtió a Lavalas (nacido como un movimiento político) en partido, Familia Lavalas, y se constituyó en su líder. En ese carácter rompió relaciones con la Organización Política Lavalas (OPL), dirigida por Pierre-Charles, aliado desde las elecciones de 1995, y comenzó a preparar su partido para enfrentarse a la OPL y a otros adversarios en los siguientes comicios. En mayo de 2000 los candidatos de FL virtualmente barrieron en las elecciones locales, municipales y parlamentarias, que estaban propuestas desde 1998.

El FL consiguió 18 de los 19 puestos en el Senado, 72 de 83 en la Cámara de Diputados y la inmensa mayoría de las 133 gobernaciones municipales y sus 564 consejos ejecutivos y legislativos de sección comunal; participaron aproximadamente 30.000 candidatos para un total de 7.500 cargos. También hubo una elevada concurrencia de votantes, partidos políticos y observadores locales e internacionales, incluyendo una misión de observación electoral de la OEA. Casi dos tercios de los electores inscritos acudieron a depositar su voto por candidatos apoyados por alguno de los 37 partidos políticos o independientes. Sin embargo, de esas 37 agrupaciones, solo 5 presentaron aspirantes a cargos en los 9 departamentos administrativos de Haití. Además de FL, estos partidos fueron: el Espacio de Concertación (EC), una coalición política dirigida por un ex-aliado de Aristide, Paul Evans, y un adversario de larga data, Serge Gilles; el Movimiento Nacional Cristiano por un Nuevo Haití (Mochrena), una nueva organización formada por líderes de las iglesias cristianas; la OPL encabezada por Pierre-Charles y rebautizada Organización del Pueblo en Lucha tras la separación de Aristide en 1997; y la Asamblea de Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP) liderada por el veterano político Lesly Manigat. No obstante, la barrida electoral de FL el 21 de mayo terminó enraizada por la controversia que surgió enseguida en torno de la aplicación de la ley electoral y de algunas cuestiones sobre el Consejo Electoral Provisional (CEP), institución encargada de la supervisión independiente del proceso.

La controversia se centró en la tabulación de votos para 19 escaños del Senado¹. Conforme a la norma, un candidato tenía que reunir la mitad más uno de los votos de todos los electores de su departamento para lograr el asiento parlamentario en la primera ronda electoral. Si ningún candidato alcanzaba esa marca, los dos que obtuvieran más votos irían a una segunda vuelta. Pocos días después de las votaciones, la misión electoral de la OEA observó que el CEP había usado un método incorrecto para calcular los resultados, ya que había contado solamente los votos de los cuatro primeros candidatos de cada sufragio departamental, en lugar de los votos acumulados por todos ellos. De esa forma, el CEP había revocado su propia ley electoral y había eliminado alrededor de 1,3 millones de votos del total. Esa estrategia de tabulación o manipulación rebajaba de hecho el total de votos que un candidato precisaba para superar el índice de 50% y evitar así la segunda vuelta. Considerando que los dos primeros puestos de todos los departamentos correspondieron a afiliados al FL, este partido era el evidente beneficiario de la estrategia. De acuerdo con la OEA, 10 escaños del Senado que el CEP declaró preliminarmente como obtenidos por FL en la primera ronda, deberían haber ido a una segunda vuelta². Las peticiones elevadas por la OEA y otros actores internacionales al CEP, el Gobierno y al mismo Aristide, solicitando que el CEP reconsiderara su uso

1. El Senado de Haití tiene 27 miembros, 3 por cada departamento. En mayo de 2000, se eligieron 2 escaños por departamento. Sin embargo en uno de ellos se eligió un tercer puesto debido al fallecimiento del titular, dando un total de 19 escaños.

2. Solamente en un caso no hubo un candidato del FL entre los dos primeros. Sin embargo, el ganador no era de otro partido, sino más bien un independiente muy vinculado al oficialismo.

del método incorrecto y enviara esos 10 cargos parlamentarios a una segunda ronda, fueron ignoradas. El hecho de que los funcionarios haitianos desatendieran la recomendación de la OEA y no tomaran medidas correctivas inmediatas dejó a los actores internacionales planteándose interrogantes, sobre todo si el FL había obtenido resultados uniformemente buenos en la primera ronda. Los observadores estaban de acuerdo en que de haberse realizado segundas elecciones para senadores, FL habría ganado la mayoría de los escaños, particularmente porque es dudoso que la fraccionada oposición lograra unirse en torno de un candidato único en una segunda vuelta. Un analista resumió el desconcierto en la comunidad internacional al comentar que el episodio daba la impresión de que Lavalas estuviera resuelto a «arrebatar la derrota de las fauces de la victoria».

Después de que la OEA expresara su inquietud, el presidente del teóricamente independiente CEP se hizo eco hablando de su propia preocupación por la aplicación del método incorrecto. Sin embargo, al poco tiempo pareció retroceder en su posición ante la creciente presión de Lavalas. Casi enseguida dos miembros del organismo renunciaron y su presidente abandonó Haití de manera furtiva, alegando temores por su seguridad personal. Los resultados de la elección fueron anunciados por un CEP reformulado –y a los ojos de muchos actores internacionales altamente sospechoso– y certificados por el Gobierno, cerrando la puerta a cualquier medida correctiva inmediata. Como consecuencia la OEA retiró su misión de observadores, y los organismos de crédito multilaterales y bilaterales, siguiendo mandatos institucionales y gubernamentales, comenzaron a suspender la ayuda a Haití. Finalmente 500 millones de dólares en asistencia para el desarrollo que ya estaban en tramitación quedaron congelados como resultado del escándalo electoral³.

Los actores internacionales –claves, entre ellos, la OEA, la Caricom, EEUU y Canadá– pasaron los meses siguientes tratando de ayudar a Haití a encontrar una salida a la crisis, centrándose especialmente en las irregulares elecciones parlamentarias. El 4 de agosto el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para despachar una misión a Haití –encabezada por el secretario general– que exploraría opciones para resolver las «dificultades ... que han surgido por interpretaciones diferentes de la ley electoral» (CP/RES 772). La Caricom, considerando diligentemente que Haití es un miembro de pleno derecho de esa organización, trabajó estrechamente con la OEA durante ese periodo. La intervención de la organización regional en las secuelas comiciales haitianas fue la continuación de su decisión de enviar al país su primera misión de observación electoral, para estas elecciones. En los meses posteriores a mayo, ni los esfuerzos hemisféricos o regionales de la OEA y la Caricom, ni las peticiones individuales, lograron convencer a las autoridades de tomar medidas que resolvieran el atolladero. Como consecuencia, el yerro en el cómputo pasó de un error enmendable a una considerable controversia internacional.

3. Posteriormente, en julio, se celebraron elecciones para varios cargos locales y municipales y de definición para escaños de diputados, que no fueron monitoreadas por la OEA.

Presiones en Haití

Esta situación facilitó las cosas para los adversarios de Aristide. Durante el periodo preelectoral, habían mantenido una abierta hostilidad muchas veces denunciando a líder y partido con gran vehemencia por lo que consideraban manipuladoras estrategias políticas, alegando que habían participado en varios actos criminales. El día de las elecciones comenzaron a hablar de fraude antes del cierre de las urnas electorales, pese a que los observadores internacionales señalaban lo bien que se había desarrollado el proceso hasta el cómputo nocturno de los votos. Por último, los cuatro principales partidos de oposición –EC, Mochrena, OPL y RDNP– reaccionaron a la controversia anunciando su intención de boicotear todas las elecciones futuras, incluyendo la presidencial que estaba constitucionalmente prevista para noviembre de 2000. Además, convergieron con rapidez en una estrategia correctiva a la que denominaron «la opción cero», como única salida del atolladero. Tal operación pedía la renuncia inmediata del presidente Preval y su reemplazo por un consejo estatal que organizaría y conduciría un nuevo proceso electoral, no solamente para los escaños parlamentarios controvertidos, sino para todos los 7.500 cargos. Los principales adversarios de Aristide invitaron a otros grupos a unirse. Finalmente 15 organizaciones políticas asumieron un pacto para la coalición denominada Convergencia Democrática (CD). Aunque varias tienen presencia nacional, en su mayoría se trata de organizaciones más bien pequeñas con muy pocos electores. Las tendencias políticas dentro de la CD van desde socialista-democrática hasta neodualierista. Prácticamente lo único que hay allí en común es una radical oposición a Aristide. Considerada por muchos haitianos como una creación de elites políticas de bases urbanas, más interesadas en el poder que en el desarrollo del país, la CD ha conseguido acaparar mucha atención pero no ha sido capaz de convocar demasiados seguidores.

Según una encuesta Gallup realizada a casi tres semanas antes de las presidenciales de noviembre de 2000, menos de 4% de los entrevistados tenía confianza en los miembros de la CD. La desconfianza popular se reforzó con la posición que tomó el «presidente provisional» Gourgue, poco después de su nombramiento, quien planteó lo que para muchos haitianos es un anatema, cuando pidió la reinstauración del ejército como una forma de salir de la crisis política. Varios de los afiliados a la CD insinuaron, no muy discretamente, que acogerían con agrado otra intervención internacional –esta vez para sacar de la presidencia a Aristide y el FL. Si bien esas peticiones prácticamente directas cayeron en oídos sordos fuera de Haití, determinadas facciones conservadoras y neodualieristas nacionales apoyaron la idea.

A pesar del ambiente político inestable, el gobierno de Preval, en vista del término de su mandato el 7 de febrero de 2001, siguió adelante con las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se renovaba también un tercio del Senado, según el cronograma electoral previsto en la Constitución. El 26 de noviembre Aristide arrasó en las votaciones y conquistó de nuevo la presidencia, y el FL ganó los nueve escaños en el Senado. Con la CD ausente

por su decisión de boicot, Aristide enfrentó a varios adversarios desconocidos y no sorprendió que obtuviera alrededor de 90% de los votos. Sin embargo, tal como ocurrió en mayo, esta victoria electoral del FL también resultó empañada. Con pocos observadores internacionales presentes –solo la Caricom envió un equipo, pero éste se abstuvo de ofrecer comentarios detallados sobre la votación– los cálculos de la concurrencia electoral variaban ampliamente, desde un elevado 60% declarado por el reformulado y aún poco reputado CEP, hasta un escaso 5% según la CD. Independientemente del número de electores que acudió a las urnas en lo que esencialmente fue una competencia con un candidato único, la elección de Aristide para su segundo mandato presidencial tuvo lugar en condiciones nada ideales, proyectando una sombra sobre su credibilidad y legitimidad como nuevo líder de la nación.

No obstante, dentro de Haití Aristide podía esperar un mandato de cinco años con el FL controlando firmemente el conjunto de los cargos públicos, ya fueran o no electivos. Parecía que finalmente Aristide había captado un capital político elusivo desde que enfrentara a un parlamento reticente, poco después de su primera investidura en febrero de 1991, a militares violentos y predadores que lo lanzaron a un exilio de tres años y, en los años posteriores a su reinstalación en el poder en 1994, a una coalición política facciosa y por último fraccionada. Puesto en palabras simples, aquel capital representaba un panorama político despejado de bloques significativos de oposición en los poderes públicos. En este escenario, se comprendía que el mayor reto de Aristide y FL era disminuir la disidencia dentro del partido. Sin embargo, ese reto fue eclipsado por otro mucho mayor: mientras el presidente y sus partidarios trataban de concentrarse en el proyecto de lanzar plenamente una agenda Lavalas para Haití, desestimando la alharaca –tanto dentro como fuera de las fronteras de la nación– por los problemas relacionados con los medios utilizados para alcanzar su fin político, sencillamente se negaba a desaparecer el ponzoñoso asunto de las disputas electorales.

El camino a la solución

Los primeros pasos concretos para salir del *impasse* se dieron a mediados de diciembre cuando el gobierno de Clinton envió a su ex-director de Seguridad Nacional, Anthony Lake, a entrevistarse con Aristide. De esta visita surgió un acuerdo de ocho puntos que el presidente y la administración Lavalas debían cumplir para enfrentar la enconada crisis política y, por consiguiente, recuperar la credibilidad del Gobierno entre los actores internacionales. Si bien algunas de las medidas estaban dirigidas a problemas tan específicos de EEUU como el narcotráfico, el lavado de dinero y la migración ilegal, otras abordaban directamente las cuestiones políticas. En forma crucial, esas iniciativas incluían promesas de Aristide de corregir prontamente el embrollo parlamentario, mediante elecciones definitivas; crear un nuevo y creíble CEP a través de consultas con figuras opositoras; e instalar un gabinete ministerial de amplia base que incluyera a «tecnócratas» independientes y miembros de la oposición. La OEA, que no participó en las negociaciones Lake-Aristide, apoyó pos-

teriormente los ocho pasos, incluyendo uno según el cual se establecería en Haití una comisión semipermanente de la OEA para ayudar a fortalecer las instituciones, proteger y monitorear los derechos humanos y facilitar el diálogo entre los actores. Después de su arribo a la Casa Blanca a fines de enero de 2001, la nueva administración de George W. Bush también avaló el plan.

Para principios de marzo de 2001 el gobierno haitiano había iniciado una serie de acciones hacia el cumplimiento del acuerdo. Algunos senadores del FL habían ofrecido dejar sus cargos y esperar una repetición de las elecciones; se creó un gabinete que incluía a varios tecnócratas y líderes de otros partidos, entre ellos Marc Bazin, el adversario más prominente de Aristide en las elecciones de 1991 y primer ministro *de facto* durante el periodo de gobierno militar entre 1991 y 1994; y se nombró un nuevo CEP. Poco tiempo después el nuevo canciller, Joseph Philippe Antonio, se dirigió al Consejo Permanente de la OEA destacando los progresos que había hecho su gobierno y proponiendo un proceso y un calendario electoral que excedían los requisitos del acuerdo de ocho puntos. Sin embargo, a pesar de que la cúpula de la OEA consideró que era una concesión importante, el Consejo recibió la oferta de Antonio con cautela, y respondió simplemente reiterando la necesidad de solucionar la disputa electoral y comprometiéndose solamente a enviar otra misión a Haití.

La circunspecta respuesta del Consejo Permanente, reiterada por otros actores internacionales, indicaba tanto el grado de desconfianza que se había extendido en torno de Aristide, como el éxito de la CD en introducirse en el proceso de negociación. A pesar de su escasa base electoral, la coalición anti-Aristide tenía poderosos aliados internacionales, particularmente dentro del Congreso estadounidense, y había usado hábilmente la antipatía que despertaba Aristide entre esos aliados para reforzar la desconfianza entre otros actores internacionales y para convertirse, a los ojos de ellos, en «la» oposición haitiana. Por eso cuando Aristide nombró a Bazin y a otros políticos o tecnócratas que no eran del FL para integrar el gabinete, conforme a los términos del acuerdo, los actores internacionales pusieron reparos porque los designados no eran de la CD, y cuando se formó el nuevo CEP, consideraron que no se estaba cumpliendo el acuerdo porque no había miembros de esta coalición, para cuyo proceso de nominación se había rehusado a participar. En consecuencia, el nuevo gobierno estaba ante un problema fundamental: sus acciones se veían como deficientes porque no incluían la participación de la CD, pero ésta seguía negándose a entablar negociaciones con el Gobierno. Desde su puesto vacío en la mesa de negociaciones, la coalición ejercía eficazmente su poder de veto sobre todo el proceso.

Después de la Cumbre de las Américas celebrada en Québec en abril de 2001, a la cual asistió Aristide, una delegación conjunta OEA/Caricom volvió a visitar Haití para buscar una salida del atolladero político que paralizaba el país. Mientras la CD mantenía su perfil intransigente, Aristide entregó a la delegación una carta dirigida al presidente de la Asamblea General de la OEA para que fuera leída en la reunión del 5 de junio en Costa Rica. En ella mani-

festaba que siete de los senadores que ocupaban escaños en disputa habían renunciado. Además comprometía a su gobierno a nombrar para el 25 de junio un nuevo CEP constituido por nueve miembros nominados por el Ejecutivo, el Poder Judicial y los partidos políticos, incluyendo la CD y las iglesias católica y protestante. Por otra parte, prometía que el nuevo CEP fijaría las fechas para las nuevas elecciones de los escaños cuestionados y las organizaría de una manera oportuna. Reiterando lo ofrecido por su primer ministro a la OEA en marzo, afirmaba que los mandatos de los parlamentarios elegidos en mayo de 2000 se reducirían en dos años. Finalizaba su carta reiterando la petición del Gobierno con el propósito de establecer la misión especial de Haití —que ahora se preveía como una misión conjunta OEA/Caricom— y expresando la esperanza de que las medidas propuestas ayudarían a aclarar el camino para que se reanudara la ayuda internacional al desarrollo de su bloqueado país.

En respuesta, la OEA aprobó cautamente el compromiso y el cronograma de elecciones de Aristide, prometiendo enviar otra misión el 25 de junio a fin de evaluar el progreso. La respuesta inmediata —y para entonces predecible— de la CD fue una condena general de las propuestas de Aristide. La coalición también censuró a la OEA por avalarlas. Señalando que ya había tenido suficiente, el secretario general adjunto de la Caricom respondió advirtiendo públicamente al grupo de oposición que debía tener cuidado de no perder su oportunidad y, como resultado, excluirse a sí mismo del proceso. El 25 de junio, una vez más una misión conjunta OEA/Caricom visitó Haití. Aunque para esa fecha aún no se había nombrado el nuevo CEP, los diplomáticos internacionales encontraron algunas razones para el optimismo: había comenzado las negociaciones, con la participación de la CD, y había cierto progreso. A mediados de julio, tras tres intensos días de discusión bajo la dirección del secretario general de la OEA, se anunció un acuerdo entre el FL y la CD en cuanto a una fórmula de nominación para un nuevo CEP y la repetición de las elecciones del 21 de mayo de 2001. Aunque quedaban detalles importantes por definir —incluyendo la fecha de las elecciones consecutivas propuestas—, la promesa de una solución al largo trance político introducía una sensación de alivio, y la esperanza de que Haití podría finalmente comenzar a salir de la parálisis política que había infligido pérdidas deplorables al país y sus ciudadanos.

Comentarios finales

La saga de manipulación electoral, agitación e intransigencia que describimos someramente aquí concuerda con lo que parecen ser dos axiomas de la política haitiana: 1) hay que ganar a como dé lugar —y tan completamente como sea posible—; y 2) si se pierde, debe hacerse todo lo posible por minar al ganador a cualquier costo. Conforme esos axiomas eran aplicados y la agitación por los resultados electorales se extendía hasta crear una parálisis económica y política general, y empeoraban las condiciones de vida de virtualmente todos los haitianos (que para comenzar no eran buenas), uno no podía dejar de asociar la situación crítica de Haití con el proverbio africano: cuando los elefantes pelean, la pisoteada es la hierba. Trágicamente, ésta ha sido

una batalla política que «no tiene una base ideológica, política o moral, pero está consumiendo el país, como un parásito socava un árbol, hasta que sobreviene la muerte». Por último, «sin la intervención vigorosa de la comunidad internacional, nadie habría aventurado una conjetura sobre cuánto podría durar la crisis»⁴. Ninguno de los actores políticos haitianos —en el mayoritario FL o en la minoritaria oposición— salió ileso de este episodio. Aristide y sus aliados cometieron un error craso al no aceptar la recomendación de la OEA de repetir las elecciones senatoriales, tal como se prevé en las propias leyes del país. Los adversarios de Aristide cometieron un terrible error con su intransigencia frente a los esfuerzos internacionales de mediación y los intentos del Gobierno para lograr un compromiso. Independientemente de los términos exactos del acuerdo final, Lavalas se verá en apuros para recuperar su actual control casi absoluto del Gobierno en elecciones que seguramente van a concitar una atención meticulosa de la comunidad internacional. Los miembros de esta fugaz e inverosímil coalición denominada CD tendrán que enfrentar una brutal realidad política: las ambiciones personales, las luchas por el poder y la estrechez de miras muy difícilmente se traducen en respaldo popular. Los enemigos de Aristide ayudaron así a asegurar la continua superioridad política del hombre y el partido que detestan sin cesar.

Si hay resultados positivos de esta larga crisis, estos pueden ser la demostración del temple del compromiso de los actores internacionales respecto de Haití —particularmente de la OEA y la Caricom— y el completo fracaso de la CD al tratar de estimular cualquier respaldo popular para su idea de resucitar el ejército, especialmente como un instrumento para la asignación de poder político. La fuerte y persistente tradición haitiana de que una fuerza armada debe determinar o reforzar el poder político tendría que llevar ahora a un detenido análisis de la situación de la Policía Nacional de Haití —una institución joven que parece crecientemente vulnerable a la manipulación política. Los actores internacionales empeñados en ayudar a Haití a abandonar generaciones de gobierno disfuncional deben tomar buena nota de este intrincado asunto.

Al menos por ahora, los líderes políticos del país se encuentran obligados a usar instrumentos de negociación y, ciertamente, de compromiso, para buscar el fin de las disputas por las cuotas de poder. Si comienzan a aplicar esos mismos instrumentos para resolver cualquier diferencia que puedan tener en cuanto a políticas públicas y programas orientados a sacar a Haití del abismo de catástrofe económica y política, y colocarlo en la vía del desarrollo político, económico y social efectivo y sostenible, entonces brillará realmente el sol sobre este país caribeño.

Washington, julio de 2001

Traducción del inglés: Nora López

4. «La crisis deja a ambos adversarios igualmente debilitados» en *Haiti en Marche*, 30/6/01.